

La Reforma en España Sobre la Vinculación de las Sociedades Profesionales con los Colegios Profesionales

KLAUS JOCHEN ALBIEZ DORMÁN

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Granada (España).

Submissão: 16.09.2013

Decisão Editorial: 14.10.2013

RESUMEN: Se examina la reforma que propone el Anteproyecto de Servicios y Colegios profesionales, presentado en el mes de agosto de 2013, de algunos preceptos de la Ley nº 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.

ABSTRACT: This paper analyzes the Draft Law on Services and Professional Corporations, presented in August 2013, some provisions of the Act nº 2/2007, approved in March 15th, on Professional Corporations.

PALABRAS Clave: sociedades profesionales, colegios profesionales, profesiones tituladas, ejercicio multiprofesional.

KEYWORDS: Professional Corporations, Professional Colleges, qualified jobs, multidisciplinary practice.

SUMARIO: 1 Prefacio de *amicus*; 2 La consecuencia de la supresión de la colegiación obligatoria para constituir sociedades profesionales; 3 El papel de los colegios profesionales; 4 Mayor publicidad de las sociedades profesionales; 5 La tercera vez que una norma se ocupa de las sociedades multidisciplinares; 6 Una mayor protección de los clientes/usuarios de sociedades profesionales.

1 PREFACIO DE *AMICUS*

No ha pasado ni siquiera un mes desde el triste fallecimiento del Profesor Rafael Barranco Vela cuando el Gobierno español presenta un Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios profesionales, cuyas directrices principales ya fueron discutidas por mi gran amigo¹ en esta última Navidad en la que aún teníamos mucha esperanza de que pudiera superar la grave enfermedad que

1 Una amistad inquebrantable, como él mismo decía, en "La trastienda del desván", escrita por él en el texto añadido a la autobiografía de su padre, R. BARRANCO MARTÍNEZ, *EL DESVAN DE MI MEMORIA*, Granada, 2011, p. 460.

padecía. Desde hacía ya tiempo, una de sus muchas preocupaciones científicas era el papel que desempeñan los Colegios Profesionales en la sociedad y en el mercado. Siempre me decía que tenía pendiente una monografía sobre los Colegios Profesionales, que desgraciadamente, al final, no se va a ver publicada. Había escrito algunas páginas importantes en una obra colectiva, que va por la tercera edición, en la que examina la vinculación que existe entre los Colegios Profesionales y las sociedades profesionales². Coherente con su espíritu, cada vez más liberal, era claramente defensor de la reducción drástica de las actividades profesionales reservadas y, por tanto, de la colegiación obligatoria que ahora propone el Anteproyecto para cumplir la exigencia categórica de la Unión Europea de que el mercado interior sea libre y competitivo.

Quiero retomar este tema como si lo estuviera analizando mi amigo Rafael. Aunque físicamente no está ya entre nosotros, sí está presente con su espíritu y su intelecto.

No creo que le haya sorprendido especialmente que uno de los aspectos más relevantes del Anteproyecto sea la supresión en la LSP de la colegiación obligatoria para la constitución de sociedades profesionales (modificación del art. 1.1-2 LSP). Si antes era un requisito consustancial a las sociedades profesionales, con el Anteproyecto se suprime totalmente. Otras normas que se modifican de la LSP son meras correcciones técnicas y coherentes con la supresión de la colegiación profesional (se modifican el apartado 1 letra b del art. 4, el apartado 1 del art. 5, el apartado 2 letra b del art. 7 y el apartado 2 letra d del art. 8).

Coherente también con la supresión de la colegiación obligatoria, la DA Decimosegunda permite a las sociedades profesionales darse de baja en los Colegios Profesionales en los que la colegiación sea obligatoria así como la inscripción de su disolución o, en su caso, de su adaptación en el Registro Mercantil. La sociedad inscrita, según la propuesta, dejará de estar sujeta a lo previsto en la Ley nº 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, pasando a regirse por lo previsto en la normativa correspondiente a la forma social adoptada. Esta DA, de aprobarse tal como está redactada, puede plantear en el futuro algunos problemas prácticos.

El Anteproyecto contiene algunas otras normas que afectan directamente a las sociedades profesionales. La más importante es la explícita referencia en el art. 13 a las sociedades multiprofesionales. Este precepto parece que no se refiere exclusivamente a las sociedades multidisciplinarias, reconocidas expresamente

2 "Los Colegios Profesionales: su régimen jurídico y los nuevos interrogantes ante la Ley de Sociedades Profesionales", *Comentarios a la Ley de Sociedades Profesionales. Régimen fiscal y corporativo*, dirs. R. García Pérez/ K.J. Albiez Dohrmann, 3ª ed., Ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2013, pp. 1149 y ss. Lejos quedan ya las reflexiones del Profesor BARRANCO VELA, pero no por ello menos relevantes, expuestas en su trabajo "Análisis del marco jurídico general de los colegios profesionales y las profesiones en España como premisa a una necesaria regulación del ejercicio profesional colectivo", en *El ejercicio en grupo de profesiones liberales*, eds. B. Moreno Quesada et al, Ed. Universidad de Granada, 1993, pp. 623 y ss.

en el art. 3 LSP. En el Anteproyecto hay además un reconocimiento general del ejercicio en común de los servicios profesionales (art. 10) y del ejercicio compatible de distintas profesiones (art. 12).

2 LA CONSECUENCIA DE LA SUPRESIÓN DE LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA PARA CONSTITUIR SOCIEDADES PROFESIONALES

De acuerdo con el actual art.1.1-2 LSP, la base objetiva y subjetiva de cualquier sociedad profesional es que los socios profesionales tengan una profesión titulada y estén colegiados. Conforme a estas exigencias legales quedan fuera del ámbito objetivo y subjetivo todas aquellas sociedades formadas por profesionales que no tienen una profesión titulada o que teniéndola no pueden colegiarse o no están obligados a la colegiación. La regulación legal de la sociedad profesional siempre ha estado muy vinculada a las actividades profesionales que requieren unos conocimientos científicos o técnicos de cierto nivel para los que es necesario obtener previamente un título universitario oficial o titulación profesional (ya en el art. 1-2 de la Propuesta del Primer Anteproyecto de Ley de Sociedades Profesionales se decía que “se entiende por actividad profesional aquella para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria e inscripción en el correspondiente Colegio profesional”). La LSP tiene una posición estricta de lo que se entiende por actividad profesional al reducirla a aquellas actividades que exigen un determinado nivel de preparación intelectual de quien las realiza, y, por otro, el control al que el ejercicio de esa actividad se somete³. Un sector de la doctrina ha defendido que el requisito de la colegiación sólo rige cuando tiene carácter obligatorio, en coherencia, además, con la DA Tercera LSP, quedando fuera de la cobertura de la Ley aquellas sociedades en las que profesionales pueden colegiarse voluntariamente⁴. La naturaleza jurídica de las sociedades profesionales establece, según una parte de la doctrina, una estrecha vinculación con las corporaciones profesionales⁵. Esta vinculación desaparece, aunque no por completo, en el Anteproyecto.

Dado el carácter estricto de la LSP en cuanto a su ámbito objetivo y subjetivo de la actividad profesional, la DGRN ha seguido una interpretación igualmente estricta en la Resolución de 16 de mayo de 2009 (RA 3279) negando la inscripción de una sociedad profesional formada por administradores de fincas. A pesar de que existen, según esta Resolución, “los títulos de <<Graduado de Estudios Inmobiliarios>>, de <<Experto inmobiliario-administrador de fincas>>

3 M. VERGÉZ SÁNCHEZ, “Comentario del art. 1”, *Comentarios a la Ley de Sociedades Profesionales. Régimen fiscal y corporativo*, dirs. R. García Pérez/ K.J. Albiez Dohrmann, 3ª ed., Ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2013, p. 57.

4 R. BARRANCO VELA, “Los Colegios Profesionales: su régimen jurídico y los nuevos interrogantes ante la Ley de Sociedades Profesionales”, en la obra colectiva citada en la nota anterior, p. 1205 y pp. 1212-1214

5 J. GARCÍA-ROMANILLOS, “Ley de Sociedades Profesionales: responsabilidad e incompatibilidades”, *La Ley*, ref. D-250, 2005, p. 1026. En España, se daba por bueno el control colegial de las sociedades profesionales, puesto de manifiesto, entre otros, por J.C. ESTEVEZ FERNÁNDEZ-NOVOA, “Las sociedades profesionales, en escena”, *La Ley*, ref. D-252, 2005, pp. 1029-1030.

u otros de similar denominación que las universidades hayan podido expedir en uso de su autonomía, no han obtenido la calificación de <<oficiales>> y, en consecuencia, no figurando inscritos en el registro administrativo creado a tal efecto, el ejercicio de la actividad de administrador de fincas no puede constituir el objeto de una sociedad profesional” (en términos idénticos, por tratarse también de la inscripción de una sociedad profesional de administradores de fincas, la RDGRN 18 mayo 2009 (RA 3280).

El Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios profesionales requiere, como la actual LSP, que la actividad profesional que se desarrolle por las sociedades profesionales sea aquella para la cual se requiere titulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial (art. 1.1-2 LSP según el Anteproyecto). En el Anteproyecto no se define, con buen criterio, la actividad profesional, pero contiene una relación de las profesiones que se verán afectadas por la futura ley, distinguiendo básicamente cuatro. La profesión colegiada, que es aquella profesión titulada para cuyo ejercicio se exija la colegiación (se debe diferenciar entre colegiación obligatoria y voluntaria). La profesión regulada se define como la actividad o conjunto de actividades profesionales, cuyo acceso, ejercicio o una de las modalidades de ejercicio estén subordinados de manera directa o indirecta, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias, a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales. En tercer lugar, se menciona la profesión titulada, siendo aquella para cuyo ejercicio se exija estar en posesión de un título académico oficial de educación superior (art. 3 del Anteproyecto). Es el título más importante que otorga la Universidad pública (los títulos de educación superior que concede la Universidad privada deben ser homologados por la Universidad Pública). Por último, están las demás profesiones que en la Exposición de Motivos reciben el calificativo de <<libres>>.

Quedan, por tanto, fuera de la cobertura legal de la LSP aquellas actividades profesionales reguladas, y también aquellas que son académicas, pero que no requieren para su ejercicio una titulación universitaria superior.

Conforme al Anteproyecto, la actividad profesional en común sujeta a la LSP coincide con la profesión titulada, es decir, aquella para la cual es necesario estar en posesión de un título académico oficial de educación superior. El Anteproyecto sigue, pues, en la misma línea que la LSP partiendo de una acepción académica de la profesión al regular el objeto de la sociedad profesional; pero, a diferencia de la actual LSP, la actividad profesional en común no está vinculada necesariamente a la acepción colegial de la profesión⁶. Resulta indiferente que sean profesiones colegiadas, como también

6 El Anteproyecto coincide en parte con la Ley alemana de sociedades profesionales (Gesetz zur Schaffung von Partnergesellschaften und zur Änderung anderer Gesetze), de 25 de julio de 1994, al no requerir necesariamente, según se deriva del § 1, la colegiación para ejercer en común la actividad profesional, si bien habrá que estar a las normas estatutarias que pudieran limitar el ejercicio societario. Pueden consultar

resulta indiferente que la colegiación sea obligatoria, sólo que en este caso la constitución de sociedades profesionales estará sujeta inevitablemente al control de los Colegios Profesionales en los mismos términos que hasta ahora. El art. 1.1-2 y otros preceptos concordantes de la LSP deberán ser interpretados conforme a las definiciones legales de la futura ley de Servicios y Colegios profesionales.

De mantenerse no obstante la vinculación colegial para constituir una sociedad profesional, significaría que la LSP sería de aplicación sólo a aquellas profesiones que según el Anteproyecto requieren para su actividad la colegiación obligatoria. Conforme a la DA Primera del Anteproyecto y la normativa específica que regula la actividad profesional, los profesionales titulados obligados a colegiarse son los siguientes: médicos, farmacéuticos, dentistas, veterinarios, enfermeros, fisioterapeutas, podólogos, ópticos-optometristas, ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos, arquitectos técnicos y otros posibles técnicos competentes (cuando estén sujetos a visado colegial obligatorio según el RD 1000/2010, de 5 de agosto), abogados, procuradores, graduados sociales, notarios y registradores⁷. Todos los demás profesionales titulados que ejercieran en común quedarían al margen de la LSP si se optara por mantener el art. 1.1-2 tal como está regulado actualmente.

Partiendo de una de las filosofías que inspiró la LSP, es un acierto que el Anteproyecto quiera suprimir ahora la colegiación como requisito para la constitución de una sociedad profesional. La independencia y la libertad que se quiere preservar mediante la LSP a los profesionales cuando ejercen en común la profesión (que son de vital relevancia en muchas actividades en las que se exigen unos conocimientos científicos o técnicos) se deben garantizar también cuando no sea necesaria la colegiación. Con la reducción de la colegiación obligatoria a determinadas profesiones, como seguramente va a suceder, las garantías que ofrece la LSP quedarían reducidas a prestaciones profesionales muy concretas cuando antes abarcaba a muchas otras. Las dos garantías que hasta ahora ofrece la LSP, inscripción en el Registro Mercantil e inscripción posterior en el Registro Profesional⁸, quedan intactas para las sociedades profesionales que obligatoria o voluntariamente se inscriben en el segundo de los Registros, mientras que la inscripción de las demás sociedades profesionales sólo en el Registro Mercantil también garantiza el cumplimiento de las normas de la LSP.

mi trabajo "Breve estudio de la Ley alemana de sociedades profesionales (<<Gesetz zur Schaffung von Partnergesellschaften und zur Änderung anderer Gesetze>>), de 25 de julio de 1994", RdS, 1998, n° 10, pp. 499 y ss.

- 7 Ha de advertirse que es más que discutible la constitución de sociedades profesionales de notarios y de registradores. Sobre las primeras, vid., por todos, J. GARCÍA MAS, "Algunas consideraciones sobre la Ley n° 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales", *Estudios sobre sociedades profesionales*, eds. B. Trigo/J. Framiñán Santas, Ed. Marcial Pons, 2009, en particular, pp. 36 y ss.
- 8 Resaltadas especialmente por A. CAMPINS VARGAS, "El Anteproyecto de Ley de Sociedades Profesionales: un paso adelante en su reconocimiento y regulación", *La Ley*, ref. D-254, 2005, p. 1040.

Con la supresión de la colegiación, la LSP rige para cualquier actividad profesional en la que se exige para su ejercicio un título académico oficial de educación superior, con independencia de que sean actividades profesionales para la que se requieran altos conocimientos científicos y técnicos o que sean actividades intelectuales, como, p.e., actividades artísticas, docentes o de comunicación de cualquier tipo. A diferencia de alguna ley extranjera de ámbito de aplicación objetivo y subjetivo aún mas amplio⁹, el Anteproyecto parte de un requisito objetivo, cual es el de estar en posesión de una titulación universitaria oficial o titulación para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial. Ello evita problemas de interpretación y de aplicación de la LSP, porque no siempre está claro qué se entiende por actividad profesional o por profesional¹⁰.

En este sentido, resulta de interés la doctrina jurisprudencial expuesta en las RRDRN de 2 de febrero de 2012, 15 noviembre 2011, 29 de junio de 2011, 4 de junio de 2011 y 23 de marzo de 200,1 en las que se cuestiona la inclusión en la cláusula estatutaria correspondiente a la actividad <<prestación de servicios>>. No por el hecho de que la actividad societaria tenga por objeto <<prestaciones de servicios>> estamos en presencia de una sociedad profesional. Estas Resoluciones traen su causa de la inscripción de escrituras-tipo para sociedades de responsabilidad limitada según la Orden nº JUS/3185/2010, de 9 de diciembre. Para la correcta aplicación de esta Orden se emite una Instrucción, con fecha de 18 de mayo de 2011, en la que se precisa que la referencia a <<actividades profesionales>>, admitida en el art. 2.4 de los Estatutos-tipo, debe entenderse atendida a actividades profesionales que no pueden considerarse incluidas en el ámbito de la Ley nº 2/2007. Esta doctrina se podrá mantener cuando se apruebe la ley de Servicios y Colegios Profesionales, si bien no es menos cierto que el Registrador Mercantil deberá estar muy atento a la composición subjetiva de la sociedad de responsabilidad limitada para que la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, no sea una vía para burlar las normas imperativas de la LSP.

9 El ámbito objetivo y subjetivo de la Ley alemana, citada en la nota 5, es aún mayor que el Anteproyecto al no exigir que el profesional liberal esté en posesión de un título académico oficial de educación superior, siendo suficiente una cualificación profesional. El § 1.2 contiene una lista de profesionales liberales, que no deja de ser una lista abierta. Lo verdaderamente importante es que los profesionales tengan una cualificación profesional o tengan una capacidad creativa de carácter personal, respondan personalmente y obtengan de forma independiente un resultado en las prestaciones de servicios de cierto nivel en interés del contratista y del interés común.

10 Siempre se ha discutido, y se seguirá discutiendo, sobre el concepto de profesional (hasta hace no mucho tiempo se identificaba con el profesional liberal). Para una aproximación, consulten, entre otros, los trabajos de E. GARCÍA TESTAL, *Ejercicio asalariado de profesiones liberales*, Ed. Tirant lo Blanch, 2006, pp. 60 y ss.; GARCÍA PÉREZ, cit., pp. 31 y ss. Siguen teniendo un valor inestimable las aportaciones de M^a T. ALONSO PÉREZ, "Notas para un estudio sociológico y económico de las profesiones liberales", *El ejercicio en grupo de profesiones liberales*, eds. B. Moreno Quesada et al, Ed. Universidad de Granada, 1993, pp. 15 y ss. En la misma obra colectiva, A.J. GALLEGO MORALES, "Profesionalización, desprofesionalización y fórmulas organizativas", pp. 83 y ss.

Con el Anteproyecto, los clientes (usuarios, empresarios, la Administración pública) que contratan con sociedades profesionales se verán beneficiados con la reforma del art. 1.1-2. El particular régimen de responsabilidad profesional de la sociedad profesional y de los socios profesionales, que está pensado en garantizar aún más los derechos de los clientes, ya no queda condicionado a que los socios profesionales estén colegiados (en el futuro una sociedad profesional formada por artistas que tienen el título universitario de Bellas Artes responderá igual que una sociedad de abogados). El particular sistema de responsabilidad se extiende, con la reforma que se propone, a todos aquellos supuestos en que dos o más profesionales desarrollen colectivamente una actividad profesional sin constituirse en sociedad profesional con arreglo a la LSP (*cfr.* DA Segunda LSP).

3 EL PAPEL DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

Hasta ahora no había una ley general de los servicios profesionales, pero nuestro ordenamiento jurídico ha contado con una Ley de Colegios Profesionales (LCP), de carácter preconstitucional, que va a ser sustituida por la futura Ley de Servicios y Colegios profesionales. Ello significa un reconocimiento explícito por parte de los redactores del Anteproyecto del papel histórico, económico y social que ejercen en nuestro país los Colegios Profesionales. Pero los más críticos desde que se empezaran a perfilar los objetivos de esta futura ley han sido los propios Colegios Profesionales. No sólo los que quedan fuera de la DA Primera sino también los que quedan incluidos en la lista de la colegiación obligatoria han protestado enérgicamente contra los propósitos del Gobierno. No hay ningún Colegio Profesional que no haya disentido con algunos de los aspectos de la futura ley. Es una ley que no satisface prácticamente a nadie, lo cual pone en peligro su legitimidad democrática y social por mucha mayoría que tenga el Gobierno para imponer su voluntad.

Han quedado fuera de la DA Primera, entre otros, profesionales tan importantes como los administradores de fincas, gestores administrativos, economistas, titulados mercantiles, agentes de la propiedad inmobiliaria o comerciales y psicólogos. Se puede discutir cuáles son las razones de la colegiación obligatoria para incluir o excluir determinadas actividades profesionales en la DA Primera. En cualquier caso, el Anteproyecto no excluye la colegiación voluntaria porque permite que a petición de los profesionales titulados se puedan crear Colegios Profesionales, debiéndose cumplir los mandatos legales (en el Anteproyecto según los arts. 23 y ss.).

El Anteproyecto debe ser valorado e interpretado conforme a la Directiva nº 2006/124/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios profesionales. Esta Directiva, cuyo principal objetivo es la eliminación de las barreras que obstaculizan el desarrollo de las actividades de servicios entre los Estados miembros de la UE, no impide que los mismos puedan establecer

restricciones mediante un régimen de autorización e incluso la obligación de pertenecer a una organización profesional para ejercer una actividad, siempre que haya razones imperiosas de interés general (*cfr.* Considerandos 39 y ss. de la Directiva).

En España, los Colegios Profesionales siempre han ejercido un control sobre el ejercicio en común de las profesiones articulando en sus normas estatutarias restricciones y prohibiciones para la constitución de sociedades profesionales. Al margen de la dudosa constitucionalidad y legalidad de algunas de las normas estatutarias, con la Ley nº 29/2009, de 22 de octubre, de 22 de diciembre, se reformó el art. 6 LCP, añadiendo un nuevo apartado, el sexto, según el cual “El ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo dispuesto en las Leyes. En ningún caso los colegios profesionales ni sus organizaciones colegiales podrán, por sí mismos o a través de sus estatutos o el resto de la normativa colegial, establecer restricciones al ejercicio profesional en forma societaria”¹¹. Con ello quedan derogadas automáticamente todas aquellas normas estatutarias que regulan aspectos societarios del ejercicio profesional que no tengan rango de ley. Hay materias que son de competencia exclusiva del legislador cuando afectan a principios básicos del ejercicio profesional como el ejercicio societario. Habrá normas generales o especiales que limiten o prohíban determinados aspectos para el ejercicio societario en atención a las características de las profesiones tituladas¹². Con la incorporación del nuevo apartado al art. 6 se logra una mayor coherencia en el Derecho colegial. No tenía sentido que la regulación de cuestiones fundamentales del ejercicio profesional colegiado estuviera garantizado por ley, mientras que el ejercicio societario podía regularse por normas de rango inferior.

En el Anteproyecto, el art. 43.6 contiene una norma semejante a la que actualmente existe: “En ningún caso los Colegios profesionales ni sus organizaciones colegiales podrán, por sí mismos o a través de sus Estatutos o el resto de la normativa colegial, establecer restricciones al ejercicio en forma societaria...”. El rango de ley de las limitaciones o prohibiciones que pudieran establecerse para el ejercicio en común de una profesión titulada queda garantizado por lo dispuesto en el art. 42.1 del Anteproyecto: “Los Consejos Generales elaborarán, para todos los Colegios de una misma profesión, oídos éstos y en su caso los Consejos Autonómicos, unos Estatutos Generales que serán sometidos a la aprobación del Gobierno, mediante Real Decreto, a través del Ministerio de adscripción. En la misma forma, se elaborarán y aprobarán los

11 Mucho antes, GARCÍA PÉREZ se pronunció sobre las materias que deben regularse por ley para el ejercicio de la profesión mediante sociedad (*cit.* pp. 301-303). Con la Reforma cualquier materia de regulación societaria para el ejercicio de la profesión es preceptivo que sea siempre con rango de ley, sin perjuicio de que los Colegios Profesionales formulen sus propuestas.

12 *Vid.* BARRANCO VELA, *cit.*, pp. 1202-1203. El autor alude a la conocida Sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán, de 14 de julio de 1987, que distingue entre materias que son transferibles y las que no son transferibles a los Colegios Profesionales, los cuales sólo tienen autonomía estatutaria (*Satzungsautonomie*) para las materias que no comprometen los principios básicos del ejercicio profesional.

Estatutos en los Colegios de ámbito nacional”. Aunque el art. 42.2 no menciona entre las materias que pueden figurar en los Estatutos generales aspectos sobre el ejercicio societario de la profesión, es obvio que puedan formar parte de su contenido. No parece que los Estatutos particulares sean la fuente legal idónea para establecer limitaciones o prohibiciones en el ejercicio societario aun cuando también tienen rango de ley.

En cuanto a lo que es estrictamente el control de los Colegios Profesionales sobre las sociedades profesionales poco cambia en el Anteproyecto, si bien se matiza que los requisitos que se exijan sólo están sujetos al control colegial cuando la colegiación sea obligatoria. El art. 5.1 LSP sigue garantizando la completa integración de la sociedad profesional en el orden corporativo cuando la misma esté formada por profesionales obligados a colegiarse¹³. De este modo, los Colegios Profesionales no sólo ejercen su control en el momento de la petición de inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales sino también a lo largo de su vigencia (exigencia que mantiene el art. 8. 4). Sigue siendo preceptiva la inscripción en el Registro de Sociedades profesionales cuando para el ejercicio de actividades profesionales se requiera la colegiación obligatoria (según dispone el art. 8.6 del Anteproyecto).

Con la supresión de la colegiación obligatoria para ejercer una actividad profesional societaria se abre la posibilidad de que los Colegios Profesionales en los que no es necesario este requisito puedan también controlar las sociedades profesionales siempre y cuando sus respectivas normas estatutarias prevean un sistema de control y creen un Registro de Sociedades profesionales. Este control es, en cualquier caso, endeble ya que no se puede obligar a las sociedades profesionales a inscribirse en el Registro correspondiente de los Colegios Profesionales voluntarios.

El Anteproyecto introduce una norma que además de ser necesaria es coherente con la LSP, vigente al menos para aquellos que defienden que esta Ley en su actual redacción sólo es de aplicación a actividades profesionales para las que es necesaria tener no sólo una titulación universitaria sino también la colegiación profesional. Con la supresión del segundo requisito, la DF Decimosegunda faculta a las sociedades profesionales para poder darse baja de modo inmediato en el Colegio Profesional así como para la inscripción de su disolución o, en su caso, su adaptación en el Registro Mercantil. Añade esta DF que la sociedad inscrita dejará de estar sujeta a lo dispuesto en la LSP, pasando a regirse por lo previsto en la normativa correspondiente a la forma social adoptada.

La DF Decimosegunda plantea algún interrogante. La sociedad profesional inscrita en un Colegio Profesional en el que no es necesaria la colegiación según la DA Primera del Anteproyecto tiene la facultad de mantener la inscripción

13 M^a C. CRESPO MORA, en la obra citada en la nota 3, p. 252.

en el Registro de Sociedades profesionales o darse de baja. Cuando elija la segunda opción, seguirá siendo una sociedad profesional, la misma que cuando se constituyó porque los socios son profesionales titulados. No hay ninguna razón para su disolución o adaptación si quiere seguir actuando como sociedad profesional, y estará sujeta, como antes, a la LSP. La DF sólo debería prever la facultad de las sociedades profesionales para solicitar la baja en el Registro de Sociedades profesionales en aquellos Colegios Profesionales en los que no se requiere la colegiación obligatoria.

4 MAYOR PUBLICIDAD DE LAS SOCIEDADES PROFESIONALES

Para facilitar y garantizar la publicidad de la hoja abierta para cada sociedad profesional en el Registro Mercantil se exige ahora, según lo dispuesto en el art. 8.5 del Anteproyecto, que se realice a través del portal nacional (una matización que antes no había) de acceso a los Registros Mercantiles y además se añade que a su vez sea a través del portal de acceso europeo de conformidad con lo establecido en la Directiva de interconexión de los Registros Mercantiles¹⁴ y, en su caso, en el Registro de Sociedades profesionales a través de un portal en Internet bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia. En cuanto al portal de Internet, en la redacción anterior se aludía sin más a este medio de publicidad sin establecer plazo alguno para su creación. La falta de predisposición del Ministerio de Justicia de crear el Portal y la incertidumbre que hay sobre su efectiva creación después de estar en vigor la LSP casi seis años, lo cual ha sido criticado por la doctrina¹⁵, quizá ha llevado a los redactores del Anteproyecto a introducir ahora en el texto legal la matización <<en su caso>>.

5 LA TERCERA VEZ QUE UNA NORMA SE OCUPA DE LAS SOCIEDADES MULTIDISCIPLINARES

En su primera redacción, el art. 3 LSP establecía que “Las sociedades profesionales podrán ejercer varias actividades profesionales, siempre que su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de rango legal o reglamentario”. Con la Ley nº 25/2009, de 22 diciembre, el texto del art. 3 queda escrito en los siguientes términos: “Las sociedades profesionales podrán ejercer varias actividades profesionales, siempre que su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de rango legal”. Esta nueva redacción, que elimina de forma definitiva la vía reglamentaria¹⁶, se mantiene intacta en el Anteproyecto. Sin embargo, en su texto se incorpora un precepto que incide directamente en el art. 3 LSP. Se dice en el art. 13 del Anteproyecto que (1) “El ejercicio de distintas actividades profesionales o profesiones a través de una misma sociedad sólo podrá declararse incompatible o someterse a condiciones

14 Directiva nº 2012/17/UE, de 13 de junio. La Directiva modifica las Directivas nºs 89/666/CEE, 2005/56/CE y 2009/101/CE.

15 A. J. QUESADA SÁNCHEZ, en la obra citada en la nota 3, p. 424.

16 Se subsana con ello la vulneración de los derechos constitucionales que contenía la norma original (D. VÁZQUEZ ALBERT, en la obra citada en la nota 3, p. 92).

por medio de norma estatal con rango de ley, y siempre que concurran razones relacionadas con la existencia de conflicto de intereses de los profesionales.”. (2) “Cuando la ley establezca límites al ejercicio conjunto de distintas actividades profesionales o profesiones sin declararlo incompatible, las sociedades están obligadas a adoptar medidas que garanticen la independencia en el ejercicio de las actividades profesionales o profesiones afectadas que la integran”.

Hasta el presente no ha habido una regulación más específica de las sociedades multidisciplinarias. Una vez aprobada la Ley de Servicios y Colegios profesionales, el Gobierno debería acometer esta tarea para una mayor protección de los profesionales que quieran ejercer colectivamente la profesión y también de los propios clientes.

Parece que los redactores del Anteproyecto no se refieren sólo a las sociedades que ejercen actividades profesionales para los cuales se requiere un título académico oficial de educación superior (profesiones tituladas) sino también a las que ejercen actividades profesionales reguladas y libres. A esta conclusión se puede llegar por varias razones. En primer lugar, porque con esta norma se quiere adaptar al Derecho español el art. 23 de la Directiva nº 2006/123/CE, que establece las reglas básicas para las actividades multidisciplinarias. En segundo lugar, porque se regulan en un precepto específico las sociedades multiprofesionales sin modificar el art. 3 LSP. En tercer lugar, no se incorpora en el texto el nombre de sociedades multidisciplinarias. Y, por último, se parte de un concepto amplio de servicios profesionales en concordancia con la Directiva nº 2006/123/CE, en el que también tienen cabida las actividades profesionales libres. Puede darse el caso de sociedades multiprofesionales constituidas por profesionales regulados o libres que deberán preservar mediante las oportunas cláusulas societarias la necesaria independencia y la libertad de cada uno de ellos en el ejercicio de sus respectivas actividades. En definitiva, aun cuando se quiere facilitar el acceso al mercado de los profesionales y la libre competencia entre ellos, se deben establecer, legal o contractualmente, las necesarias garantías para preservar la independencia y la libertad en el ejercicio de la profesión.

El art. 13.1 del Anteproyecto determinará la interpretación del art. 3 LSP en su actual redacción. No sólo se podrá declarar incompatible el ejercicio de una profesión con otra sino que también podrá establecer condiciones para el ejercicio de dos o más profesiones. Se precisa en el Anteproyecto que la norma que establezca la incompatibilidad o fije condiciones ha de ser una norma estatal con rango de ley. Ello puede suponer un golpe importante a la competencia legislativa que en esta materia quieren atribuirse las Comunidades Autónomas¹⁷, es decir, determinar las incompatibilidades y restricciones en el

17 Con carácter general, se debe tener en consideración el estudio de M^a P. GARCÍA RUBIO, “El problema competencial en la Ley nº 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales”, *Estudios sobre sociedades profesionales*, eds. B. Trigo/J. Framiñán Santas, Ed. Marcial Pons, 2009, en particular, pp. 54 y ss.

ejercicio multidisciplinar y multiprofesional (el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña aprobó en 2000 un Reglamento de Sociedades Profesionales de Abogados, el cual tiene legitimidad desde la Res. JUS/2265/2008, de 8 de julio. Con el Anteproyecto, el art. 13 de este Reglamento, que regula el objeto social y la composición de las sociedades profesionales de abogados, sería claramente nulo – en realidad, será nulo todo el Reglamento con la nueva Ley Servicios y Colegios Profesionales al no tener rango de ley –). Exige el art. 13.1 para declarar incompatible el ejercicio de una profesión con otra o fijar determinadas condiciones “que concurran razones relacionadas con la existencia de conflicto de intereses de los profesionales” (la Directiva nº 2006/123/CE se refiere a razones imperiosas de interés general). Con este mandato se quiere garantizar materialmente el derecho de ejercer la profesión mediante una sociedad profesional, no debiendo limitarse el control de incompatibilidad o de condiciones para el ejercicio societario a garantías meramente formales¹⁸.

6 UNA MAYOR PROTECCIÓN DE LOS CLIENTES/USUARIOS DE SOCIEDADES PROFESIONALES

Aunque hay un marco general de protección de los consumidores y usuarios cuando contratan con empresas, entre las que también están las sociedades profesionales, en concreto los arts. 62 y ss. TRLGDCU, no existe una especial protección en la contratación de servicios profesionales. A diferencia de otros ordenamientos jurídicos, nuestro Derecho de consumo se ha ocupado principalmente del intercambio de bienes de consumo y de algunas contrataciones específicas como el viaje combinado, la concertación de créditos al consumo o el aprovechamiento de bienes inmuebles por turno. El Anteproyecto no regula ni debe regular, ni siquiera de forma genérica, el contrato de servicios profesionales, pero establece algunas normas para una mayor calidad de los servicios y protección de los consumidores. Se dirige a las Administraciones para que fomenten la adhesión de los profesionales al Sistema Arbitral de Consumo (art. 50); se quiere impulsar la transparencia y difusión de los instrumentos favorecedores del correcto ejercicio profesional (art. 51); se pretende crear un Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales (art. 52) e impulsar la formación continua de los profesionales (art. 53) así como promover la creación de sistemas de certificaciones de profesionales.

18 Denunciado por VÁZQUEZ ALBERT, en su examen sobre la jurisprudencia en este tema, cit., pp. 136-138.